EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

RESPUESTAS EXAMEN TIPO TEST PARA LA PROVISIÓN DE 1 PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE VILLANUEVA DE LA SERENA CELEBRADO EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2026.

PREGUNTA N.º Y RESPUESTA		PREGUNTA N.º Y RESPUESTA		PREGUNTA N.º Y RESPUESTA		PREGUNTA N.º Y RESPUESTA		RESPUESTAS RESERVA	
N.º	RESPUESTA	N.º	RESPUESTA	N.º	RESPUESTA	N.º	RESPUESTA	N.º	RESPUESTA
1	D	26	C	51	B	76	A	R1	B
2	C	27	B	52	B	77	B	R2	C
3	C	28	C	53	B	78	B	R3	B
4	D	29	A	54	B	79	C	R4	B
5	B	30	B	55	C	80	C	R5	D
6	B	31	C	56	C	81	B	R6	D
7	A	32	B	57	B	82	B	R7	B
8	C	33	D	58	B	83	C	R8	C
9	C	34	B	59	C	84	C	R9	A
10	B	35	C	60	A	85	D	R10	C
11	A	36	B	61	B	86	B		
12	B	37	D	62	C	87	A		
13	C	38	B	63	C	88	C		
14	D	39	A	64	B	89	B		
15	C	40	A	65	C	90	B		
16	A	41	B	66	B	91	B		
17	C	42	A	67	B	92	C		
18	B	43	A	68	B	93	C		
19	B	44	B	69	C	94	B		
20	C	45	B	70	A	95	C		
21	D	46	C	71	B	96	B		
22	B	47	B	72	C	97	C		
23	A	48	D	73	C	98	D		
24	C	49	B	74	B	99	C		
25	C	50	B	75	C	100	D		

Se establece un plazo de tres días hábiles para reclamaciones a contar desde el día siguiente a la publicación de este escrito.

Villanueva de la Serena, a 4 de noviembre de 2026.

SECRETARIA

Dª Susana Renco Remedios.

EXAMEN TIPO TEST PARA LA PROVISIÓN INTERINA DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA.

1.Según el artículo 22 de la Constitución se reconoce el derecho de asociación. Indique la respuesta correcta.

a) Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deben inscribirse en un registro a los efectos de su constitución.

b) Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial.

c) Se prohíbe las asociaciones secretas y las ilegales.

d) Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada.

2. ¿Cuál de los siguientes derechos puede ser suspendido respecto de personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas?

a) El derecho de reunión.

b) El derecho de asociación.

c) El derecho al secreto de las comunicaciones.

d) El derecho de petición.

3. ¿Cuál es la duración del mandato de los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?

a) 4 años.

b) 5 años.

c) 6 años.

d) 9 años.

4.Con respecto a la Delegación Legislativa establecida en el artículo 82 de la Constitución Española cual es la respuesta correcta:

a) La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley ordinaria cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley de bases cuando se trate de refundir varios textos legales en uno sólo.

b) La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno sólo.

c) Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación no podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.

d) La delegación legislativa permite la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.

5. ¿Qué rango normativo tienen los reglamentos en el ordenamiento jurídico español?

a) Superior a la Constitución y a las leyes.

b) Inferior a las leyes y subordinado a la Constitución.

c) Igual que las leyes ordinarias.

d) Solo tienen carácter orientativo y no son obligatorios.

6. ¿Quién nombra al Presidente de una Comunidad Autónoma una vez elegido por la Asamblea Legislativa?

a) El Presidente del Gobierno

b) El Rey

c) El Senado

d) El Tribunal Constitucional

7.El artículo 25 de la Ley orgánica 1/2011 de 28 de enero, de reforma del Estatuto de autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con relación a la investidura del Presidente establece:

a) Si en el plazo de dos meses a partir de la primera votación ninguno de los candidatos hubiera sido elegido, la Asamblea quedará disuelta y el Presidente de la Comunidad Autónoma en funciones procederá a convocar nuevas elecciones.

b) Si en el plazo de dos meses a partir de la segunda votación ninguno de los candidatos hubiera sido elegido, la Asamblea quedará disuelta y el Presidente de la Asamblea en funciones procederá a convocar nuevas elecciones.

c) Si en el plazo de dos meses a partir de la primera votación ninguno de los candidatos hubiera sido elegido, la Asamblea quedará disuelta y el Presidente de la Asamblea en funciones procederá a convocar nuevas elecciones.

d) Si en el plazo de dos meses a partir de la segunda votación ninguno de los candidatos hubiera sido elegido, la Asamblea quedará disuelta y el Presidente de la Comunidad autónoma en funciones procederá a convocar nuevas elecciones.

8. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local establece en su artículo 14:

a) Los cambios de denominación de los Municipios sólo tendrán carácter oficial cuando, tras haber sido anotados en un Registro creado por la Administración de la Comunidad Autónoma correspondiente para la inscripción de todas las entidades, se publiquen en el Boletín Oficial del Estado.

b) Los cambios de denominación de los Municipios sólo tendrán carácter oficial cuando, tras haber sido anotados en un Registro creado por la Administración de

la Comunidad Autónoma correspondiente para la inscripción de todas las entidades, se publiquen en el Diario Oficial de Extremadura.

c) Los cambios de denominación de los Municipios sólo tendrán carácter oficial cuando, tras haber sido anotados en un Registro creado por la Administración del Estado para la inscripción de todas las entidades, se publiquen en el Boletín Oficial del Estado.

d) Los cambios de denominación de los Municipios sólo tendrán carácter oficial cuando, tras haber sido anotados en un Registro creado por la Administración del Estado para la inscripción de todas las entidades, se publiquen en el Diario Oficial de Extremadura.

9. Cuando un juez considera que una ley aplicable al caso puede ser contraria a la Constitución, debe plantear:

a) Un recurso de amparo.

b) Un conflicto de competencias.

c) Una cuestión de inconstitucionalidad.

d) Un recurso contencioso-administrativo.

10. ¿Qué mayoría se requiere para la adopción de acuerdos relativos a la alteración del término municipal?

a) Mayoría simple

b) Mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación

c) Dos tercios de los miembros presentes

d) Unanimidad.

11. La Comunidad Autónoma de Extremadura tiene competencia exclusiva en materia de:

a) Agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.

b) Fuerzas Armadas.

c) Aduanas.

d) Nacionalidad.

12. ¿Quién coordina el padrón municipal para evitar errores y duplicidades?

a) El Ayuntamiento.

b) El Instituto Nacional de Estadística.

c) Las Diputaciones Provinciales.

d) La Comunidad Autónoma.

13. ¿Qué institución debe ser aprobada por el Parlamento Europeo antes de iniciar su mandato?

a) El Consejo Europeo.

b) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

c) La Comisión Europea.

d) El Banco Central Europeo.

14. La reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura, una vez aprobada por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica, entra en vigor:

a) Al publicarse en el BOE exclusivamente.

b) A los veinte días de su publicación.

c) Tras su publicación en el Diario Oficial de Extremadura exclusivamente.

d) Tras su publicación en el BOE y conforme a lo dispuesto en la propia Ley Orgánica.

15. La propuesta de candidato a Presidente del Gobierno por el Rey, tras las consultas previstas en el artículo 99 de la Constitución, será refrendada por:

a) El Presidente del Gobierno

b) El Presidente del Senado.

c) El Presidente del Congreso de los Diputados.

d) El Presidente del Congreso y del Senado.

16. ¿Quién puede interponer el recurso de amparo constitucional?

a) El Ministerio Fiscal.

b) El Gobierno.

c) Toda persona física que invoque un interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

d) Solo el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo.

17. ¿Cuál de los siguientes servicios debe prestar obligatoriamente todo municipio?

a) Transporte urbano.

b) Biblioteca pública.

c) Alumbrado público.

d) Protección civil.

18.De acuerdo con el Real Decreto 2568/1986 (ROF), entre la convocatoria y la celebración de una sesión del Pleno, ¿cuántos días hábiles deben transcurrir como mínimo, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias urgentes?

a) Al menos un día hábil.

b) Al menos dos días hábiles.

c) Al menos tres días hábiles.

d) Al menos cinco días hábiles.

19. Según lo dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), ¿en qué plazo máximo debe expedir el Secretario de la Corporación las certificaciones solicitadas por los interesados?

a) En el plazo improrrogable de tres días naturales.

b) En el plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

c) En el plazo de diez días hábiles, ampliable a veinte si el volumen de los documentos lo requiere.

d) Inmediatamente en el mismo acto de la solicitud, salvo oposición motivada del Alcalde.

20. Dentro de las formas de acción administrativa y en relación con el régimen de las subvenciones regulado en el artículo 25 del RSCL:

a) Las subvenciones locales tienen carácter obligatorio y permanente para la Corporación una vez concedidas el primer año.

b) Serán plenamente válidos los acuerdos de subvenciones que obedezcan a una mera liberalidad si son aprobados por el Pleno por mayoría absoluta.

c) La Corporación podrá revocar o reducir las subvenciones en cualquier momento (salvo cláusula en contrario), teniendo carácter voluntario y eventual, y no excederán en ningún caso del cincuenta por ciento del coste de la actividad.

d) Las subvenciones locales son siempre exigibles como derecho consolidado por los beneficiarios del ejercicio anterior, pudiendo solicitarse aumentos y revisiones automáticas del IPC.

21. Según dispone el artículo 11.2 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las disposiciones contenidas en las Ordenanzas y Reglamentos locales vinculan por igual a los administrados y a la propia Corporación, con la particularidad de que:

a) El Pleno de la Corporación podrá otorgar dispensas individuales de su observancia motivadas por razones de urgencia económica o social.

b) El Alcalde podrá suspender cautelarmente la vigencia de una ordenanza fiscal mediante decreto si perjudica la iniciativa privada.

c) Los administrados podrán eximirse de su cumplimiento si demuestran un perjuicio patrimonial superior al coste de la tasa local.

d) La Corporación no podrá dispensar individualmente de su observancia bajo ningún concepto ni circunstancia.

22. Cuando una entidad local pretende enajenar bienes inmuebles cuyo valor exceda del 25 por ciento de los recursos ordinarios de su Presupuesto, ¿qué exigencias de quórum y autorización se requieren preceptivamente?

a) Simple mayoría de los presentes y la mera dación de cuentas en la sesión ordinaria posterior.

b) El voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación y, además, la autorización o intervención del órgano competente de la Comunidad Autónoma.

c) La aprobación por unanimidad de todos los concejales y el visado vinculante del Tribunal de Cuentas.

d) Está prohibida de forma absoluta la venta de inmuebles que superen ese porcentaje presupuestario.

23. En relación con la cesión gratuita de bienes inmuebles patrimoniales a entidades públicas o instituciones sin ánimo de lucro regulada en el RBEL:

a) Los bienes cedidos revertirán automáticamente al patrimonio de la Entidad Local si los cesionarios los destinasen a fin distinto de aquel para el que fueron cedidos o incumpliesen las condiciones estipuladas en el acuerdo de cesión.

b) La cesión gratuita otorga la propiedad plena y libre al cesionario, extinguiéndose cualquier derecho de control o recuperación por parte del Ayuntamiento tras la firma de la escritura.

c) La cesión gratuita no puede contemplar nunca plazos de duración determinados, debiendo ser siempre por tiempo ilimitado.

d) La competencia para revocar la cesión gratuita corresponde exclusivamente al Juez de lo Contencioso-Administrativo tras demanda del Interventor.

24. En relación con los procedimientos de enajenación de bienes inmuebles patrimoniales regulados en la LPAP (artículo 137), señale la opción correcta:

a) La forma general de adjudicación será siempre la adjudicación directa autorizada por el Consejo de Ministros.

b) La enajenación se realizará mediante concurso público de méritos urbanísticos y estudio de impacto económico.

c) La regla general de adjudicación es la subasta pública, que podrá ser alzada o mediante concurso, salvo en los supuestos legalmente previstos que permitan la adjudicación directa.

d) Está prohibida la venta de inmuebles patrimoniales del Estado a personas jurídicas extranjeras bajo ningún concepto.

25.Conforme a las disposiciones sobre el control contable y jurídico del patrimonio contenidas en la Ley 33/2003:

a) La formación del Inventario General de Bienes y Derechos es un documento de carácter meramente potestativo e interno para los ministerios económicos.

b) Únicamente deben inventariarse los bienes inmuebles históricos, quedando excluidos por ministerio de la ley los valores mobiliarios y los derechos reales.

c) Todas las Administraciones Públicas, así como los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de ellas, están obligados a formar y mantener permanentemente actualizado su inventario de bienes y derechos.

d) El Inventario General carece de valor jurídico probatorio frente a los asientos registrales del Registro de la Propiedad en ningún caso.

26. De conformidad con el artículo 8.2 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales (RD 1690/1986), señale qué circunstancia impide taxativamente que pueda llevarse a cabo la segregación de una parte de un municipio:

a) Que el núcleo de población afectado cuente con menos de mil habitantes censados.

b) Que la Diputación Provincial emita un informe desfavorable no vinculante por motivos de suficiencia financiera.

c) Que el territorio a segregar esté unido por calle o zona urbana continua al municipio originario del que se pretende desmembrar.

d) Que la superficie total resultante sea inferior a cincuenta kilómetros cuadrados.

27. En relación con la tramitación del cambio de domicilio de oficio en el Padrón Municipal regulado en el artículo 73 bis del RPDTEL:

a) Requiere siempre y en todo caso el informe preceptivo y vinculante previo del Consejo de Empadronamiento.

b) Los Ayuntamientos pueden declararlo de oficio cuando los vecinos hayan cambiado de dirección en el municipio sin comunicarlo, previa instrucción de expediente con audiencia al interesado, sin necesidad de informe del Consejo de Empadronamiento aun cuando el interesado no lo acepte expresamente.

c) Solo puede llevarse a cabo si transcurren más de cinco años desde la última modificación padronal inscrita.

d) Corresponde su aprobación definitiva por mayoría absoluta del Pleno de la corporación local.

28. Conforme a las previsiones del artículo 30 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales sobre el nombre de los municipios:

a) Los cambios de denominación de los municipios adquieren plena validez oficial desde el mismo día en que se adopta el acuerdo por el Pleno de la Corporación.

b) La denominación oficial de los municipios debe figurar obligatoriamente de forma bilingüe en todos los supuestos sin excepción.

c) Los nombres de los municipios de nueva creación y los cambios de denominación sólo adquieren carácter oficial cuando, tras su inscripción o anotación en el Registro de Entidades Locales de la Administración del Estado, se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado».

d) Las Comunidades Autónomas tienen competencia exclusiva y excluyente para otorgar el carácter oficial a los nombres mediante orden autonómica publicada en su propio diario oficial, sin intervención estatal.

29. Según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, no se podrá autorizar la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas:

a) En aquellos asuntos en los que el personal esté emitiendo dictamen, informe o resolución, o intervenga directamente en su tramitación por razón de su cargo.

b) En ningún caso a ningún empleado público, estando prohibida de forma absoluta cualquier actividad mercantil o industrial privada.

c) Únicamente cuando la actividad privada se desarrolle dentro de la misma provincia donde tenga su destino administrativo el funcionario.

d) Cuando los ingresos derivados de la actividad privada superen el cincuenta por ciento de la retribución principal del puesto público.

30. Conforme al artículo 14 de la Ley 53/1984, de Incompatibilidades, sobre el procedimiento de reconocimiento de compatibilidad para una segunda actividad:

a) La resolución recaída en el expediente de compatibilidad deberá dictarse en el plazo máximo de tres meses, entendiéndose estimada por silencio administrativo positivo si transcurre dicho plazo sin resolución expresa.

b) La resolución se dictará en el plazo máximo de dos meses, entendiéndose desestimada por silencio administrativo si transcurre dicho plazo sin resolución expresa.

c) El plazo de resolución es de seis meses y opera el silencio administrativo positivo por analogía con el procedimiento administrativo común.

d) No existe plazo legal de resolución, quedando a la discrecionalidad absoluta del órgano competente.

31. Según dispone el artículo 18.2 del TREBEP en relación con los requisitos exigidos a los funcionarios de carrera para participar en los procesos de promoción interna:

a) Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso y tener una antigüedad de, al menos, un año de servicio activo en el inferior Subgrupo o Grupo de clasificación profesional.

b) Se exige inexcusablemente una antigüedad de, al menos, cinco años de servicio activo en el cuerpo de origen para poder promocionar a un subgrupo superior.

c) Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional (en el supuesto de que este no tenga subgrupo), y superar las correspondientes pruebas selectivas.

d) No se exige ningún requisito mínimo de antigüedad en el puesto de origen si el funcionario cuenta con titulación universitaria superior.

32. Atendiendo a los plazos de prescripción de las infracciones y sanciones disciplinarias regulados en el artículo 97 del TREBEP, señale la correlación temporal jurídicamente correcta:

a) Las infracciones muy graves prescriben al año; las graves, a los seis meses; y las leves, al mes.

b) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años; las graves, a los dos años; y las leves, a los seis meses.

c) Todas las infracciones disciplinarias prescriben unificadamente a los cuatro años por aplicación supletoria del derecho penal.

d) Las infracciones leves prescriben a los dos años, y las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los diez años.

33. Según el artículo 25 de la Ley 17/2010, el gobierno y la administración de la mancomunidad corresponden a:

a) El Pleno de la Diputación Provincial y el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

b) Exclusivamente un Consejo Rector nombrado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

c) Los Alcaldes de todos los municipios de la provincia de forma directa y sin necesidad de representación adicional.

d) La Asamblea, integrada por todos los representantes de los municipios y entidades locales menores mancomunadas, y a su Presidente, asistidos por la Junta de Gobierno.

34. Según el artículo 3.3 de la Ley 17/2010 de Extremadura, cuando una Entidad Local Menor pretende integrarse en una mancomunidad:

a) Debe obtener la autorización preceptiva del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura con carácter previo a cualquier acuerdo vecinal.

b) Se exige que cuenten con la autorización de la iniciativa por el municipio matriz al que estén adscritas, entendiéndose emitida dicha autorización si, solicitada por la Entidad Local Menor, transcurre el plazo de un mes sin que el Ayuntamiento matriz haya adoptado acuerdo motivado en contra.

c) No requiere ningún tipo de conocimiento ni intervención por parte de su municipio matriz, al poseer plena autonomía asociativa.

d) Se requiere el voto favorable de dos tercios del Pleno del Ayuntamiento matriz en todo caso.

35. ¿Qué efectos tienen las causas de inelegibilidad reguladas en el artículo 177 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General respecto a la posterior condición de concejal, según establece el artículo 178.1?

a) Ninguno, son figuras jurídicas completamente independientes.

b) Solo impiden el acceso a la condición de alcalde, pero no la de concejal.

c) Las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad con la condición de concejal.

d) Eximen al afectado de la obligación de formular la declaración de bienes de la corporación.

36. ¿Qué plazo formal establece el artículo 178?3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para que un concejal electo opte entre el cargo de concejal o la situación de incompatibilidad en la que se encuentra incurso?

a) Un plazo improrrogable de 5 días naturales desde la fecha de las elecciones.

b) Un plazo de 10 días siguientes a la aceptación de la condición de concejal.

c) Un plazo de 15 días hábiles a contar desde la publicación del escrutinio general en el BOE.

d) Debe optar de forma obligatoria en el mismo momento de presentar su credencial ante la Junta Electoral de Zona.

37. ¿Cuál de las siguientes no es una modalidad de modificación del presupuesto general de una entidad local según la normativa vigente?

a) Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

b) Anticipos de tesorería

c) Transferencias de crédito

d) Créditos reservados de libre disposición

38. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un crédito extraordinario y un suplemento de crédito según la normativa reguladora de las haciendas locales?

a) El crédito extraordinario se financia exclusivamente con endeudamiento, mientras que el suplemento de crédito requiere necesariamente remanente de tesorería.

b) El crédito extraordinario se utiliza para realizar un gasto específico y urgente para el que no existe crédito en el presupuesto, mientras que el suplemento de crédito se aplica cuando el crédito inicial es insuficiente y no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente.

c) El crédito extraordinario es competencia exclusiva del alcalde, y el suplemento de crédito debe ser aprobado siempre por el Pleno.

d) El crédito extraordinario solo se puede tramitar durante el primer trimestre del año, a diferencia del suplemento de crédito que se puede realizar en cualquier momento.

39. ¿Cuál es el destino preferente o primer límite legal aplicable al remanente de tesorería para gastos generales cuando arroja un saldo positivo?

a) La financiación de modificaciones presupuestarias (como suplementos de crédito o créditos extraordinarios) respetando la normativa de estabilidad presupuestaria.

b) Su reparto lineal y discrecional en concepto de productividad entre todo el personal laboral y funcionario.

c) Su ingreso obligatorio e inmediato en el Tesoro Público de la Administración General del Estado.

d) La constitución automática de capital social para empresas privadas externas al municipio.

40.Según el artículo 20 de la Ley 19/2013, ¿cuál es el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de una solicitud de acceso a la información pública, y qué posibilidad de ampliación contempla?

a) Un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente, ampliable por otro mes más si el volumen o la complejidad de la información así lo aconsejan.

b) Diez días hábiles, improrrogables en ningún supuesto administrativo.

c) Tres meses desde la solicitud, con ampliación automática a seis meses por silencio administrativo positivo.

d) Quince días naturales, con posibilidad de una única prórroga de cinco días adicionales.

41. ¿Qué establece el artículo 17.3 de la Ley 19/2013 respecto a la motivación de las solicitudes de acceso a la información pública?

a) Que el solicitante está obligado a motivar detalladamente su petición únicamente cuando se trate de documentos económicos.

b) Que el solicitante no está obligado a motivar su solicitud, y la ausencia de motivación no podrá por sí sola ser causa de rechazo de la solicitud.

c) Que la falta de motivación debe subsanarse obligatoriamente en un plazo de 10 días tras requerimiento del órgano.

d) Que motivar la solicitud es un requisito opcional cuyo incumplimiento reduce el plazo legal de respuesta a la mitad.

42. Contra la resolución (expresa o ficta) en materia de acceso a la información pública, se puede interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo antes de acudir a la vía contencioso-administrativa, en el plazo de:

a) 1 mes desde la notificación o desde que se produzca el acto presunto.

b) 15 días hábiles.

c) 3 meses desde la resolución.

d) 2 meses.

43. De conformidad con el artículo 77.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando los tratamientos de datos sean efectuados por las Administraciones Públicas y demás organismos enumerados en dicho precepto:

a) La autoridad de protección de datos no propondrá la imposición de multas, sino que dictará una resolución con una amonestación ordenando que se adopten las medidas para adecuar los tratamientos.

b) Se les impondrán exactamente las mismas multas pecuniarias de hasta 20 millones de euros previstas en el artículo 83 del RGPD.

c) Quedan por completo exentos de cualquier tipo de supervisión, inspección o reproche por parte de la AEPD.

d) Se les impondrá obligatoriamente la inhabilitación del cargo público del responsable del tratamiento.

44. En los supuestos a que se refiere el artículo 77 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la resolución de la Autoridad de Protección de Datos que declare la infracción por parte de una Administración Pública se comunicará, además:

a) Al Defensor del Pueblo con carácter exclusivo.

b) Al superior jerárquico del infractor y, en su caso, al órgano o autoridad con competencia para incoar procedimiento disciplinario.

c) A la Presidencia del Gobierno mediante inserción obligatoria en la sección principal del BOE.

d) Al Tribunal Constitucional para que declare la inconstitucionalidad de la actuación del órgano.

45. Según el artículo 4.2 de la Ley 39/2015, las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales:

a) No tienen en ningún caso la consideración de interesadas en los procedimientos administrativos.

b) Son titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la ley reconozca.

c) Solo pueden actuar si representan al 100% de los afectados de una comunidad autónoma.

d) Requieren una autorización judicial previa para comparecer en cualquier expediente.

46. La falta o el defecto de acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de:

a) 5 días hábiles, o un plazo superior cuando las circunstancias del caso lo requieran.

b) 10 días, computados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento.

c) 10 días, o un plazo superior cuando las circunstancias del caso lo requieran.

d) 15 días naturales improrrogables.

47. Suponga que un interesado acude presencialmente a una oficina de asistencia en materia de registros de una Administración Pública para presentar una solicitud que requiere firma electrónica obligatoria, pero carece de un sistema de firma electrónica propio. ¿Cómo resuelve la Ley 39/2015 esta situación en su artículo 12?

a) La solicitud no podrá ser admitida a trámite bajo ningún concepto, debiendo el funcionario denegar el acceso al registro de forma motivada.

b) La firma podrá ser válidamente realizada por el funcionario público competente, utilizando su propio sistema de firma electrónica, siempre que el interesado se identifique ante él y preste su consentimiento expreso, debiendo quedar constancia de ello para los casos de discrepancia o litigio.

c) El funcionario firmará en nombre del interesado de oficio, sin necesidad de recabar su consentimiento, en virtud del principio de celeridad y eficacia administrativa.

d) El interesado firmará de forma manuscrita en un papel y la Administración dispondrá de un plazo de 10 días para digitalizarlo y aplicarle un sello digital de la oficina de registro, cobrando la tasa de digitalización correspondiente.

48. De conformidad con el artículo 33 de la Ley 39/2015, cuando razones de interés público lo aconsejen se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, lo cual conlleva:

a) La reducción a la tercera parte de todos los plazos del procedimiento, incluidos los de interposición de recursos.

b) La eliminación de todos los trámites preceptivos del procedimiento para ganar celeridad.

c) Que contra el acuerdo que declare la tramitación de urgencia quepa interponer recurso contencioso-administrativo autónomo.

d) Que se reduzcan a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

49. Conforme al artículo 20 de la Ley 39/2015, los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tengan a su cargo la resolución o despacho de los asuntos:

a) Quedan exentos de responsabilidad si el asunto supera los seis meses de tramitación sin resolverse.

b) Son responsables directos de su tramitación y de adoptar las medidas necesarias para tramitar con celeridad el procedimiento, velando por el cumplimiento de los plazos.

c) Carecen de responsabilidad funcional individual, recayendo toda ella de forma abstracta en el órgano superior jerárquico.

d) Solo responden disciplinariamente si existe previa sentencia penal firme condenatoria.

50. Según el artículo 96 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos administrativos tramitados de forma simplificada, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, deberán ser resueltos, a contar desde el día siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, en el plazo de:

a) Cuarenta y cinco días.

b) Treinta días.

c) Quince días.

d) Veinte días.

51.Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho cuando:

a) Limiten derechos objetivos o intereses legítimos.

b) Resuelvan procedimientos de revisión de oficio.

c) Acepten pruebas propuestas por los interesados.

d) Las respuestas b) y c) son correctas.

52. Según la Ley Orgánica 3/2007, ¿qué se entiende por discriminación indirecta por razón de sexo?

a) Cualquier diferencia salarial entre hombres y mujeres.

b) La situación en que una disposición aparentemente neutra perjudica especialmente a personas de un sexo.

c) Un insulto dirigido a una mujer.

d) La exclusión expresa de mujeres de un proceso selectivo.

53. ¿Qué instrumento prevé la ley para promover la igualdad en empresas de determinado tamaño o circunstancias?

a) Convenios disciplinarios.

b) Planes de igualdad.

c) Reglamentos internos obligatorios del Ministerio.

d) Comités electorales paritarios.

54. ¿Cómo considera la ley el acoso sexual?

a) Una falta leve de convivencia.

b) Una forma de discriminación por razón de sexo.

c) Un conflicto laboral ordinario.

d) Una infracción exclusivamente penal.

55. ¿Qué principio debe integrarse en la actuación de todos los poderes públicos según la ley?

a) El principio de libre competencia.

b) El principio de neutralidad presupuestaria.

c) El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.

d) El principio de descentralización administrativa.

56. Según la Ley General de Subvenciones, ¿qué tiene la consideración de subvención?

a) Cualquier contrato celebrado por una Administración Pública.

b) Toda entrega dineraria realizada por una Administración sin necesidad de cumplir finalidad alguna.

c) Una disposición dineraria realizada por una Administración Pública a favor de personas públicas o privadas que cumpla determinados requisitos y persiga una finalidad de interés público, social o similar.

d) Únicamente las ayudas concedidas a empresas privadas.

57. ¿Cuál de los siguientes principios debe regir la gestión de las subvenciones públicas?

a) Libre designación.

b) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

c) Discrecionalidad absoluta del Órgano concedente.

d) Reserva y confidencialidad de todas las actuaciones.

58 ¿Qué obligación básica tiene el beneficiario de una subvención?

a) Destinar los fondos recibidos únicamente a gastos de personal.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y la realización de la actividad subvencionada.

c) Mantener abierta una oficina administrativa durante cinco años.

d) Solicitar una nueva subvención al finalizar la actividad.

59. ¿Qué procede cuando se comprueba un incumplimiento de las condiciones establecidas para la concesión de una subvención?

a) La ampliación automática de la ayuda.

b) La conversión de la subvención en préstamo.

c) El reintegro de las cantidades percibidas, en los casos previstos legalmente.

d) La concesión de una nueva subvención compensatoria.

60.Según el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, ¿qué documento suele concretar las condiciones específicas de concesión de una subvención directa?

a) El convenio.

b) El contrato menor.

c) El pliego de cláusulas administrativas.

d) La memoria económica anual.

61. ¿Cuál es el objeto de la jurisdicción contencioso-administrativa?

a) Resolver exclusivamente conflictos entre particulares.

b) Controlar la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa sometida al Derecho Administrativo.

c) Enjuiciar delitos cometidos por empleados públicos.

d) Resolver conflictos laborales entre empresas privadas.

62. ¿Qué órgano conoce, con carácter general, de los recursos contencioso-administrativos en primera o única instancia dentro de su ámbito territorial?

a) El Tribunal Constitucional.

b) El Tribunal Supremo.

c) Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

d) Las Audiencias Provinciales.

63. ¿Quién puede interponer un recurso contencioso-administrativo?

a) Únicamente las Administraciones Públicas.

b) Solo los funcionarios de carrera.

c) Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo.

d) Exclusivamente los ciudadanos mayores de edad.

64. ¿Qué finalidad tienen las medidas cautelares reguladas en la Ley 29/1998?

a) Sustituir la sentencia definitiva.

b) Garantizar provisionalmente la efectividad de la resolución judicial que pudiera recaer.

c) Imponer sanciones a la Administración demandada.

d) Suspender automáticamente todos los actos administrativos recurridos.

65. Frente a la inactividad de la Administración en los casos previstos legalmente, el interesado:

a) No puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

b) Debe esperar obligatoriamente cinco años para reclamar.

c) Puede interponer recurso contencioso-administrativo en los términos establecidos por la ley.

d) Solo puede presentar una queja ante el Defensor del Pueblo.

66. Según la Ley 11/2018, ¿cuál es una de las clases básicas de suelo contempladas en la normativa?

a) Suelo industrial.

b) Suelo urbano.

c) Suelo consolidado especial.

d) Suelo metropolitano.

67. ¿Cómo considera la Ley 11/2018 la ordenación territorial y urbanística?

a) Como una actividad económica privada.

b) Como una función pública.

c) Como una competencia exclusiva municipal sin coordinación autonómica.

d) Como una actuación voluntaria de los propietarios.

68. ¿Cuál de los siguientes instrumentos forma parte de la ordenación territorial general regulada por la ley?

a) Proyecto de Reparcelación.

b) Directrices de Ordenación Territorial.

c) Licencia urbanística.

d) Catastro inmobiliario.

69. La Ley 11/2018 establece que la ordenación territorial y urbaní¬stica debe orientarse por criterios de:

a) Rentabilidad privada.

b) Liberalización del suelo.

c) Ordenación sostenible.

d) Crecimiento urbano ilimitado.

70. ¿Qué instrumento de ordenación territorial está previsto para un ámbito concreto del territorio de Extremadura y desarrolla las Directrices de Ordenación Territorial?

a) Plan Territorial.

b) Proyecto de Urbanización.

c) Estudio de Detalle.

d) Licencia de Parcelación.

71. ¿Cuál de las siguientes es una prerrogativa de la Administración en los contratos administrativos?

a) Resolver de forma amistosa cualquier controversia sin intervención del contratista.

b) Interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.

c) Modificar libremente cualquier contrato sin limitación legal.

d) Subcontratar parte del contrato en nombre del adjudicatario.

72. Con carácter general, la ejecución del contrato se realizará:

a) A riesgo y ventura de la Administración.

b) Bajo la dirección exclusiva del contratista.

c) A riesgo y ventura del contratista.

d) A riesgo compartido entre Administración y contratista en todos los casos.

73. ¿Cuándo pueden modificarse los contratos del sector público?

a) En cualquier momento y por cualquier motivo.

b) Solo cuando lo solicite el contratista.

c) Únicamente en los casos y con los límites previstos en la Ley.

d) Exclusivamente mediante una nueva licitación.

74. ¿Qué efecto produce la resolución de un contrato administrativo?

a) La continuación automática de su ejecución.

b) La extinción del contrato.

c) La prórroga obligatoria del contrato durante un año.

d) La cesión inmediata del contrato a otro empresario.

75. En relación con la cesión de los contratos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) La cesión está prohibida en todos los contratos públicos.

b) El contratista puede ceder libremente el contrato sin autorización administrativa.

c) La cesión solo es posible cuando concurren los requisitos establecidos legalmente.

d) La cesión únicamente puede realizarse al finalizar el contrato.

76. ¿Qué debe contener, con carácter general, el acuerdo de iniciación de un procedimiento administrativo iniciado de oficio?

a) La identificación del órgano competente, los hechos que motivan la iniciación y, en su caso, las medidas provisionales.

b) Únicamente la identificación del interesado.

c) La propuesta de resolución definitiva.

d) La resolución final del procedimiento.

77. En la ordenación del procedimiento administrativo, las actuaciones se impulsarán:

a) instancia de parte exclusivamente.

b) De oficio en todos sus trámites.

c) Solo mediante resolución expresa.

d) Según decida el interesado.

78. ¿Cuál es una garantía básica de los interesados durante la tramitación del procedimiento administrativo?

a) Poder modificar libremente las normas aplicables.

b) Conocer en cualquier momento el estado de tramitación del procedimiento.

c) Exigir una resolución favorable.

d) Suspender unilateralmente el procedimiento.

79. Durante la fase de instrucción del procedimiento, los hechos relevantes para la decisión podrán acreditarse mediante:

a) Únicamente documentos públicos.

b) Solo declaraciones del instructor.

c) Cualquier medio de prueba admisible en Derecho.

d) Exclusivamente informes periciales.

80. Cuando en un procedimiento administrativo deban cumplimentarse trámites por los interesados, estos deberán realizarse, con carácter general, en el plazo de:

a) Tres días.

b) Cinco días.

c) Diez días.

d) Quince días.

81. Según la Ley 39/2015, los procedimientos administrativos podrán finalizar:

a) Únicamente mediante resolución expresa.

b) Por resolución, desistimiento, renuncia al derecho en que se funde la solicitud, declaración de caducidad o imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.

c) Solo por resolución o caducidad.

d) Exclusivamente por acuerdo entre las partes.

82. Con carácter general, la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo:

a) Puede abstenerse de resolver las cuestiones planteadas por los interesados.

b) Debe ser congruente con las peticiones formuladas y resolver todas las cuestiones planteadas.

c) Solo debe pronunciarse sobre los aspectos económicos.

d) Debe limitarse a aceptar la propuesta del instructor.

83. Respecto al desistimiento y la renuncia, señale la afirmación correcta:

a) Son conceptos idénticos y producen los mismos efectos en todos los casos.

b) La renuncia puede ejercerse incluso cuando está prohibida por el ordenamiento jurídico.

c) El desistimiento supone el abandono de la solicitud, mientras que la renuncia implica el abandono del derecho.

d) Ninguno de ellos pone fin al procedimiento.

84. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración podrá acordar la caducidad una vez transcurridos:

a) Un mes.

b) Dos meses.

c) Tres meses.

d) Seis meses.

85. En la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de:

a) 10 días.

b) 15 días.

c) 20 días.

d) 30 días.

86.En el procedimiento de revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho, si transcurre el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado resolución expresa en un procedimiento iniciado de oficio:

a) Se produce la estimación por silencio administrativo.

b) Se produce la caducidad del procedimiento.

c) La Administración pierde la competencia para resolver.

d) El procedimiento queda suspendido automáticamente.

87. ¿Cuál de las siguientes resoluciones agota la vía administrativa?

a) La resolución de un recurso de alzada.

b) La resolución de un órgano inferior jerárquico susceptible de recurso.

c) Cualquier acto de trámite.

d) La propuesta de resolución formulada por el instructor.

88. Interpuesto un recurso de reposición contra un acto administrativo expreso, el plazo para su presentación será de:

a) Diez días.

b) Quince días.

c) Un mes.

d) Tres meses.

89. Señale la afirmación correcta respecto del recurso extraordinario de revisión:

a) Puede interponerse contra cualquier acto administrativo definitivo.

b) Solo cabe contra actos firmes en vía administrativa.

c) Sustituye al recurso de alzada cuando exista discrepancia con el fondo del asunto.

d) Es obligatorio antes de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

90. Cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo:

a) El recurso podrá entenderse desestimado por silencio administrativo.

b) El recurso se convierte automáticamente en recurso de reposición.

c) El órgano competente está obligado a dictar resolución expresa.

d) El interesado deberá acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa.

91.Cuando un Órgano administrativo dicta una resolución por delegación de competencias, ¿cómo debe hacerse constar?

a) Únicamente con la firma del órgano delegado.

b) Indicando expresamente que actúa por delegación y considerándose el acto dictado por el órgano delegante.

c) Mediante la autorización previa del superior jerárquico en cada expediente.

d) Sin necesidad de hacer referencia a la delegación.

92, Según la Ley 40/2015, las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo:

a) Siempre que la infracción sea leve.

b) Cuando así lo acuerde el órgano sancionador.

c) Cuando favorezcan al presunto infractor o al infractor, incluso respecto de sanciones pendientes de cumplimiento.

d) Exclusivamente cuando exista sentencia judicial firme.

93, ¿Cuál de los siguientes criterios aparece expresamente recogido en la Ley 40/2015 para graduar una sanción administrativa?

a) La capacidad económica del infractor.

b) El impacto mediático de la infracción.

c) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.

d) La antigüedad del infractor en la organización.

94. Según la Ley 40/2015, ¿cuál de los siguientes es un tipo de convenio previsto expresamente?

a) Convenio arbitral interadministrativo.

b) Convenio entre una Administración Pública y un sujeto de derecho privado.

c) Convenio de concesión administrativa.

d) Convenio reglamentario.

95. Con carácter general, ¿cuál es la duración máxima inicial de un convenio según la Ley 40/2015?

a) Dos años.

b) Tres años.

c) Cuatro años.

d) Cinco años.

96. ¿Cuál es uno de los principios que rigen la contratación pública según la Ley 9/2017?

a) Confidencialidad absoluta de todos los procedimientos.

b) Libertad de acceso a las licitaciones.

c) Contratación preferente con empresas nacionales.

d) Adjudicación automática a la oferta más económica.

97. ¿Cuál de los siguientes contratos tiene por objeto la realización de una obra o trabajo de construcción?

a) Contrato de suministro.

b) Contrato de servicios.

c) Contrato de obras.

d) Contrato de concesión de servicios.

98. ¿Qué procedimiento de adjudicación tiene carácter ordinario en la Ley 9/2017?

a) Procedimiento negociado sin publicidad.

b) Procedimiento restringido.

c) Diálogo competitivo.

d) Procedimiento abierto.

99. ¿Cuál de las siguientes circunstancias constituye una prohibición para contratar con el sector público?

a) Tener más de 50 trabajadores.

b) Estar inscrito en el Registro Mercantil.

c) Haber sido condenado mediante sentencia firme por determinados delitos.

d) Ser una sociedad limitada.

100. Con carácter general, ¿qué criterio debe utilizarse para adjudicar los contratos públicos?

a) Exclusivamente el precio más bajo.

b) Sorteo entre los licitadores admitidos.

c) La oferta económicamente más ventajosa basada únicamente en criterios subjetivos.

d) La mejor relación calidad-precio.

EXAMEN TIPO TEST PARA LA PROVISIÓN INTERINA DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA PREGUNTAS RESERVA.

R-1. La Junta de Gobierno Local es obligatoria en:

a) Todos los municipios.

b) Municipios de más de 5.000 habitantes.

c) Municipios de más de 20.000 habitantes.

d) Municipios de gran población.

R-2. El control y fiscalización de los órganos de gobierno corresponde:

a) Al Alcalde.

b) A la Junta de Gobierno Local.

c) Al Pleno.

d) A la Comisión Especial de Cuentas.

R-3 Señale la afirmación correcta en relación con la tramitación y aprobación del acta de las sesiones corporativas según el ROF:

a) El acta debe aprobarse obligatoriamente antes de iniciar la discusión de cada punto del orden del día.

b) El acta, una vez aprobada por el Pleno, se transcribirá en el Libro de Actas.

c) El acta es redactada de forma exclusiva por el Alcalde sin intervención del Secretario.

d) Las actas no se someten a aprobación plenaria, siendo válidas con la firma del concejal más joven.

R-4 De conformidad con el artículo 84 de la Ley 7/1985 (LBRL) y la doctrina sobre los límites de la actividad de policía local:

a) Las Entidades Locales pueden restringir la libertad de los ciudadanos de forma discrecional y sin sujeción a ningún principio limitador si existe urgencia social.

b) La intervención local en la actividad privada debe ajustarse estrictamente a los principios de igualdad de trato, congruencia con los fines que la justifican y respeto a la libertad individual y de empresa.

c) El principio de congruencia exige que cualquier medida restrictiva de policía local esté orientada exclusivamente a incrementar los ingresos presupuestarios por tasas.

d) La potestad de intervención local no está sujeta al principio de proporcionalidad, bastando con que la medida restrictiva se incluya dentro de las competencias municipales.

R-5 En relación con las restricciones que impone el ordenamiento jurídico a los concejales en el ejercicio del derecho a presentar y firmar una moción de censura:

a) Ningún concejal puede firmar más de tres mociones de censura a lo largo de toda su vida pública municipal.

b) Los concejales no adscritos por causa de transfuguismo disfrutan de los mismos derechos que el resto para suscribir iniciativas de control, sin límite temporal.

c) La prohibición de firmar más de una moción de censura decae si el Pleno inicial fue declarado nulo por sentencia judicial firme.

d) Ningún concejal podrá firmar durante su mandato más de una moción de censura, computándose a tal efecto las que hubiesen sido retiradas por sus proponentes, y los concejales no adscritos no podrán ser candidatos ni firmar mociones si provienen de transfuguismo en las condiciones legales aplicables.

R-6. Según dispone el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, tiene por objeto garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en:

a) El artículo 17.4 de la Constitución

b) El artículo 16.4 de la Constitución

c) El artículo 15.4 de la Constitución.

d) El artículo 18.4 de la Constitución

R-7. ¿Cuál de los siguientes contenidos debe incluir necesariamente un convenio?

a) La relación nominal de todos los empleados públicos que participaron en su ejecución.
b) El régimen de modificación del convenio.
c) El reglamento interno de las Administraciones firmantes.
d) La previsión de creación de una sociedad mercantil.

R-8. ¿Cuál de las siguientes resoluciones es susceptible de extensión de efectos en los términos previstos por la Ley 29/1998?

a) Cualquier sentencia firme dictada por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, con independencia de la materia.

b) Únicamente las sentencias firmes del Tribunal Supremo.

c) Las sentencias firmes recaídas en materia tributaria, de personal al servicio de las Administraciones Públicas y de unidad de mercado, cuando concurran los requisitos legales.

d) Exclusivamente las sentencias que anulen disposiciones generales.

R-9. ¿Qué órgano contempla la Ley 8/2011 para promover la participación social de las mujeres en Extremadura?

a) Consejo Extremeño de Participación de las Mujeres.

b) Consejo de Seguridad Ciudadana.

c) Comisión General de Empleo Público.

d) Consejo Económico y Social de Extremadura.

R-10. Según la Ley 8/2011, la integración de la perspectiva de género en todas las políticas públicas recibe el nombre de:

a) Corresponsabilidad institucional.

b) Acción positiva.

c) Transversalidad de género.

d) Representación equilibrada.